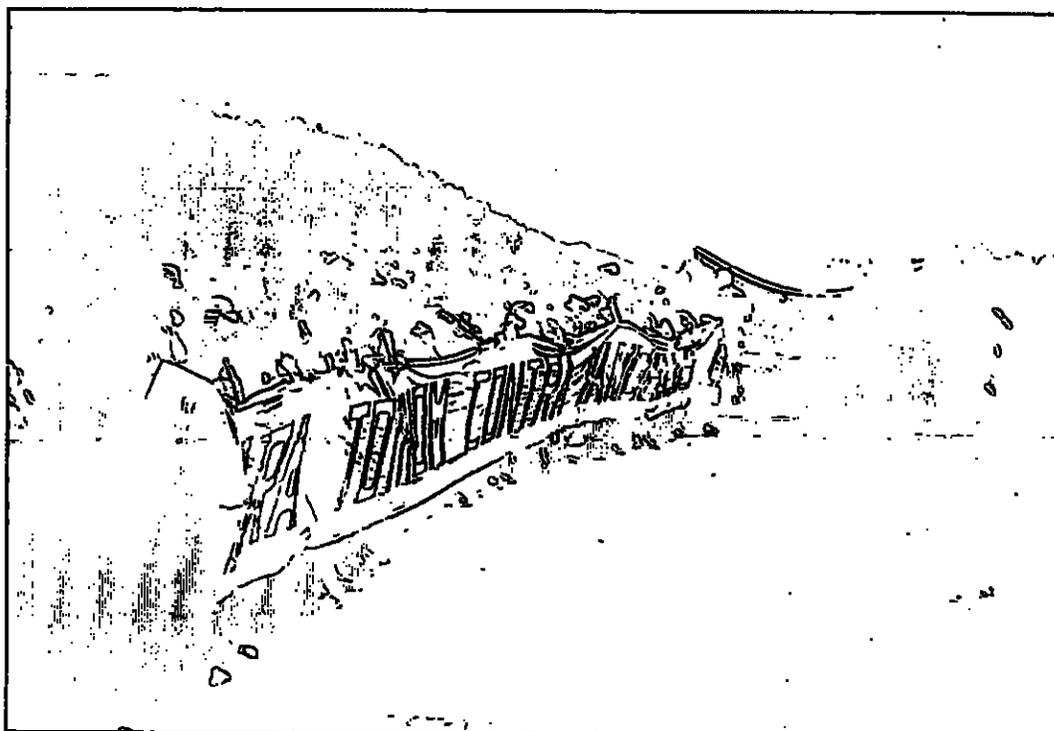


# ECOLOGISMO Y NUEVA POLITICA

## ¿LA DEMOCRACIA ES BUENA PARA EL MEDIO AMBIENTE?

Fabio Giovannini



A finales de los años ochenta una breve temporada de debate atravesó el medioambientalismo político en Italia. Nos planteábamos explícitamente una pregunta, en el curso de seminarios y congresos: ¿la democracia es buena para el medio ambiente? La duda era expuesta por Alex Langer, que dejaba abierto el interrogante, pero proponía una respuesta escéptica sobre las posibilidades de que la democracia pueda proteger el planeta del perjuicio medioambiental. Luego, la caída del Muro de Berlín i la insistente propaganda sobre la democracia occidental como estadio supremo e insupe-

rable ofuscó también aquellas dudas, dejando el puesto a la exaltación acrítica de las virtudes del modelo democrático de esta parte del mundo, aparentemente triunfante sobre todas las anomalías y las búsquedas de caminos diferentes. En realidad, las dudas de Langer iban en una dirección ambigua, que dejaba espacio a interpretaciones incluso neo-autoritarias.

A la pregunta *¿La democracia es buena para el medio ambiente?* se ha contrapuesto la pregunta *¿El medio ambiente es bueno para la democracia?* (Edo Ronchi). Es decir, ¿la protección del medio ambiente no

exige acaso centralización, decisiones seguras y tomadas rápidamente en lugares restringidos e inapelables, tecnócratas y hombres «iluminados» que intervengan con vigor en nombre de la salvación del planeta, y para los cuales la democracia constituiría sólo un engorro y una atadura? En realidad, la contradicción entre medio ambiente y desarrollo no sólo exige soluciones técnicas (contra la contaminación o para salvar el empleo), sino también una revolución cultural y una diferente concepción y práctica de la democracia. De otro modo, la cuestión medioambiental se convierte sólo en un cómodo pretexto para acelerar las tendencias a la verticalización del poder y a la expansión del modelo norteamericano de democracia. Estos son problemas frente a los cuales la ecología política no puede ser indiferente. El gobierno mundial, además del estatal/nacional, las cumbres de los países de diferentes áreas geo-políticas, los ministros del medio ambiente, los entes locales: éstos parecen los sujetos institucionales de la democracia, que rivaliza con el medio ambiente. Y cada uno de estos sujetos se caracteriza hoy por un vaciamiento de sentido, por un distanciamiento profundo de los representantes de los representados. Es probable que *esta* democracia no sea buena para el medio ambiente, pero en cambio es absolutamente seguro que no eran y no son buenos para el medio ambiente el capitalismo y el liberalismo, que son en gran parte los autores de *esta* democracia.

La catástrofe medioambiental sólo puede evitarse con capacidad de programación y con *reglas*: justo lo contrario del liberalismo fundado en la desregulación. Al mismo tiempo, precisamente la empresa capitalista exige una institución estatal centralizada y un «gobierno mundial» verticista para administrar mejor sus propios intereses. Un terreno difícil, pues, ambiguo, y en el cual el sujeto «verde» que se ha asomado a la

política en el último decenio corre el riesgo de encontrarse desguarnecido e inmediatamente absorbido y debilitado. Aun teniendo en sí anticuerpos de gran interés.

## 1. LA PECULIARIEDAD VERDE

Los movimientos monotemáticos sobre los problemas particulares (*single issues*) en nuestro tiempo se identifican cada vez más con *un único* problema particular. Nace, en suma, el movimiento-problema. También el movimiento verde se ha visto atraído hacia esta lógica. Pero la cuestión medioambiental no podía reducirse al esquema del movimiento-problema. En efecto, la ecología *no* es uno de los numerosos intereses parciales. Los organismos ecologistas tienden a salir cada vez más del sectorialismo. Constituyéndose en sujeto verde son llevados a ocuparse también de temas aparentemente alejados de la protección del medio ambiente.<sup>1</sup>

Sin embargo, un cierto medioambientalismo durante mucho tiempo no se ha querido proponer el problema político. Algunas grandes asociaciones medioambientalistas han sido reacias durante años a admitir la definición de «ecología política» (pienso, por ejemplo, en el WWF), incluso actuando de hecho también en el terreno directamente político. El motivo de este alejamiento de la política es que la cuestión medioambiental sería ante todo (si no *sólo*) un problema de conocimientos y de *conciencia*. Una sensibilización de la «gente» sería, en este sentido, la solución del problema ecológico. Esto explica también la prioridad dada por algunos grupos protectionistas y medioambientalistas a la intervención en las escuelas, entre los más jóvenes. Esta aproximación exige, en síntesis, el predominio del «sentido común». Pero, en realidad, parece demasiado fácil atribuir la responsabilidad del desastre me-

<sup>1</sup> Pero es precisamente al apartarse de una visión sectorial del medioambientalismo donde surgen las dificultades: ¿cómo puede el movimiento verde afrontar con puntos de vista homogéneos, por ejemplo, los problemas de la sexualidad? No es casual que al respecto los verdes italianos hayan atravesado en dos

ocasiones acaloradas polémicas, cuando se discutió, durante el debate de la ley sobre la violencia sexual, en torno a las relaciones sexuales *entre* menores y *no* menores, y cuando algunos verdes declararon la innaturalidad de las relaciones homosexuales.

dioambiental a los individuos particulares. Si es legítimo proponer el problema de los contaminados que son a la vez contaminadores, no se puede rehuir el aspecto socialmente diferenciado del desastre medioambiental contemporáneo.

Pero, en su conjunto, el verde es un archipiélago en el que se ha realizado una *convivencia entre diferentes*: baste pensar en la sintonía sobre mínimos denominadores comunes obtenida en muchas ocasiones, por ejemplo, entre una asociación con un explícito origen de izquierdas como la Liga del medio ambiente, por una parte, y, por la otra, una asociación de matriz moderada como el WWF. Algo alejado del *eclecticismo* manifestado por los partidos propiamente dichos (como el PCI y luego el PDS) capaces de presentar como candidatos en sus listas a supernuclearistas y antinuclearistas. Esta *convivencia de diversidades* ha permitido no caer en los errores de otras formaciones políticas surgidas de la oposición y destinadas a la marginalidad o a la reproposición de una rígida forma-partido. Los verdes (y por verdes entiendo a todo el archipiélago ecologista, y no listas o experiencias electorales particulares), en cambio, han intentado un camino innovador. Esto no obsta que los verdes sigan viviendo lo que se ha definido como «la paradoja de la representación». Cuanto más el movimiento se acerca a las características de un partido, tanto más pierde su originalidad. ¿Pero cuánto puede resistir a las reglas partidocráticas, un movimiento que apuesta por irrumpir en el sistema político y de partidos a través de sus propias listas electorales? ¿Cuánto tiempo puede escapar a las mediaciones y a los compromisos típicos de la democracia parlamentaria multipartidista?<sup>2</sup>

Y también la forma-partido es amenazadora: ya se habla de una clase política verde, en Italia, con las mismas características

que los otros partidos. Funcionarios del aparato, políticos de profesión, se están multiplicando también en el mundo verde incluso en las realidades asociativas nacionales; con un recorrido diferente del de los Gruenen alemanes. Sin embargo, existe una irreductibilidad tendencial de los verdes a las costumbres de los sistemas políticos partidocéntricos, con raíces profundas, también de naturaleza teórica. Los movimientos sociales de estos últimos veinte años han propuesto *de hecho* una teoría nueva del poder y de las formas de gobierno. Los movimientos verdes, sobre todo fuera de las fronteras italianas, han expresado una crítica original al sistema político-institucional liberal y al poder.

Ante todo, el movimiento verde (pero en este caso sería mejor hablar de movimiento ecopacifista) ha tenido una escasa propensión a la delegación. A través de una lectura dinámica de la no violencia, este movimiento ha desarrollado, por tanto, una precisa crítica de la centralización del poder, y ha practicado constantemente la acción política directa. De las prácticas ecopacifistas, entre otras cosas, han surgido los primeros ejemplos de transversalismo y de superación de un viejo concepto de pertenencia al partido<sup>3</sup>. Además, los movimientos verdes han alcanzado una capacidad de lucha y movilización de masas, trabajando sobre problemas concretos de la vida cotidiana, con acciones directas que no atendían a compatibilidades o equilibrios políticos dados. Mientras que la izquierda tradicional, por el contrario, permanecía prisionera de la «governabilidad».

Asimismo, los movimientos verdes han criticado el propio proceso de formación de la decisión política, poniendo en discusión que el único poder de control/orientación de los elegidos sea el voto. En Italia esta originalidad verde fue obstaculizada por las contradicciones internas al área misma de

<sup>2</sup> Los motivos de la falta de estructuración como partido de los verdes italianos son múltiples. Hasta ahora resiste formalmente una organización por asociaciones y por listas. Uno de los motivos debe buscarse probablemente en la existencia de una experiencia particular como la del Partido radical. Este partido, además, ha experimentado con meritoria anticipación

una estructura federativa, pero utilizando el término «partido» para autodefinirse y para moverse en el sistema político. Una experiencia, la radical, sobre la que reflexionar.

<sup>3</sup> Véase al respecto *Militancia sin pertenencia*, Materiales y actas, n.º 6, suplemento de *Democrazia e diritto*, enero-febrero de 1986.

la ecología política. Hubo un principio de debate en el movimiento verde, hace algunos años, con un largo artículo-intervención de Alex Langer, Gad Lerner, Luigi Manconi y Mauro Paissan aparecido en *Manifesto* del 4 de octubre de 1987, pero con un rápido cierre de la discusión. La única continuación de ese debate se produjo en las páginas de *Democrazia e diritto*, con una serie de contribuciones publicadas bajo el título de «Medioambientalismo y poder».<sup>4</sup>

En las intervenciones de los verdes en el debate de 1987 faltaba una respuesta convincente a los problemas de funcionamiento de la democracia. En síntesis, se trataba de una posición evasiva. No se advertía, por ejemplo, la insuficiencia del modelo liberal. La democracia representativa en ese modelo funciona sólo como *jaula de energías* de otro modo incontrolables. A causa de esa fallida respuesta de la cultura política verde a los problemas de la democracia, se llegó a una verdadera oferta de «intercambio desigual», que ya vislumbramos en 1987, en su primera manifestación: el antagonismo de los verdes se suspende para tener una legitimación/cooptación en el plano político-institucional. Sólo así pueden leerse las continuas ofertas de apoyo a gobiernos y ayuntamientos de cualquier color por parte de las direcciones verdes en Italia.

En realidad, el movimiento verde, como gran parte de los movimientos y de las áreas de oposición, no ha percibido adecuadamente el alcance de la reasignación de recursos económicos producida por el neoconservadurismo de los años ochenta, y en consecuencia ha subestimado también sus aspectos secundarios en términos de un nuevo desplazamiento de poderes. Las clases dominantes, en suma, han intentado redefinir las reglas de juego y de poder. El problema se ha hecho evidente de manera explosiva con las vicisitudes italianas de

1992 (elecciones anticipadas con crisis profunda del sistema político, reiteradas «exteriorizaciones» y luego dimisión del Presidente de la República como episodio de una ofensiva más vasta contra la Constitución, disgregaciones «liguistas» de la democracia, etc.) La entrada en juego de la ecología política exigía un análisis «verde» del sistema político. Si lo verde no puede reducirse a estilos de vida o a la concreción de los *single issues*, si verdaderamente lo verde no es una instancia parcial, entonces debe saber proponer también una reforma del Estado. Y a este resultado no se llega mediante atajos, sino con una búsqueda a largo plazo, capaz de dotar a la identidad verde de una mayor capacidad de análisis y teorización sobre el tema de la democracia.<sup>5</sup>

## 2. LA DEMOCRACIA QUE ES MALA PARA EL MEDIO AMBIENTE

Dando por descontado que la palabra democracia ha adquirido un universal valor positivo, y que el «bien» del imaginario del fin de milenio es identificado con quien lucha por la democracia, no se puede negar que las ideas de democracia son muy diferentes entre sí. Hay una democracia liberal, por ejemplo, fundada en la empresa capitalista, útil a la industria y a sus exigencias, que deja en segundo plano todos los otros problemas y no conoce más prioridad que la subsistencia y la expansión de la empresa misma. Las reglas democráticas en este caso, aunque fácilmente violables cuando es necesario, están, de todos modos, orientadas a gestionar relaciones económicas bien precisas, con poderes centralizados e incontrolables.

La democracia que es mala para el medio ambiente es precisamente ésta. Una democracia centralista en las sedes de representación, tendencialmente inspirada en una

<sup>4</sup> Cfr. *Democrazia e diritto*, n.º 6, 1987. Intervenciones de F. Clementi y F. Giovannini, P. degli Espinosa, S. d'Albergo, P. Ceri y B. Zeuner.

<sup>5</sup> Un ejemplo de esta falta de análisis verde es el fracasado proyecto sobre el tema de los referendums. Los verdes no se han interrogado suficientemente so-

bre el alcance del tema referendario: referendums sólo consultivo y referendums de orientación. Para reavivar el debate entre los verdes ni siquiera ha servido la derrota del referendums en California en noviembre de 1990, sobre el paquete de medidas en defensa del medio ambiente conocido como Big Green.

filosofía «mayoritaria», como competencia entre pocos partidos casi idénticos entre sí, en creciente desacuerdo con las poblaciones. De esta democracia nociva para el medio ambiente son protagonistas las fuerzas políticas tradicionales del conservadurismo, pero también poderosas fuerzas económicas. En Italia, por ejemplo, una campaña centralista sobre el preciso plano de la crisis ecológica, desarrollada al menos desde 1987, cuando se celebraron (en mayo y en diciembre) dos congresos de la Confindustria (Confederación General de la Industria Italiana) sobre el medio ambiente, abiertos con informes de Walter Mandelli.

Si se pasa por alto la obvia tosquedad de los argumentos, típica del empresariado más agresivo, esos informes eran a su manera una obra maestra, que años después aún mantiene su validez. Mandelli demostraba concreción e ideología capitalista en sus informes. Volvía a proponer todas las compatibilidades capitalistas y una idea de las instituciones democráticas para uso del capital. Ya no existe la vieja contraposición privado/público, sino un nuevo planteamiento. Así como sólo se puede privatizar con el dinero del Estado, del mismo modo se puede sacar provecho de la contaminación producida por la empresa sólo gracias al dinero público que subvenciona a las mismas empresas para la descontaminación. En esos dos congresos la Confindustria ha solicitado, quizás por primera vez en su historia, «más Estado», es decir, ha dejado de lado la vieja invitación a la desregulación típica de los ambientes industriales, a menudo admitida también por la administración pública: en 1987 la Confindustria solicitaba *más reglas* sobre el tema medioambiental, pero en el planteamiento confindustrial *más reglas* significa *más Estado central*. La operación de Mandelli fue la de acusar a Ayuntamientos, Provincias y Regiones, echando sobre sus espaldas todas las responsabilidades por los retrasos y las situaciones con frecuencia dramáticas de la emergencia medioambiental. La solicitud, implícita y en algunos puntos incluso explícita, se convierte en la de una expropiación de poderes en esta materia a las autonomías locales.

Es significativo que la Confindustria en

los dos congresos de 1987, que iniciaron una ofensiva todavía en curso, no haya citado nunca a la energía, apartando del medio ambiente este tema de implicaciones decisivas, mutilando así su propia aproximación. Afrontar el tema energético desde un punto de vista compatible con el medio ambiente y la salud ocasiona demasiadas dificultades al mundo industrial. La Confindustria se ha detenido sobre todo en el problema de la contaminación, porque ha advertido una gran oportunidad para hacerse *confiar* todos los fondos de la descontaminación. El objetivo es crear un ciclo ininterrumpido de ganancias empresariales tanto de la producción como de la contaminación provocada por ciertos impactos medioambientales. La financiación de los costes por la descontaminación correspondería, obviamente, al Estado, y la idea confindustrial es conseguir las ganancias incluso de los efectos negativos de la producción: un ciclo continuo de contaminación y descontaminación.

La Confindustria ha presentado también propuestas legislativas, algunas para defenderse, obviamente, de las acusaciones de ser uno de los principales responsables de la contaminación y degradación medioambiental, otras para aumentar el peso de los empresarios en la esfera pública (solicitando, por ejemplo, una mayor presencia de los empresarios en algunos organismos del Ministerio del Medio Ambiente), aunque manteniendo como línea estratégica la reducción del papel y de los poderes de las autonomías locales. No sorprende la tendencia muy clara de esta fuerza económica a obtener beneficios de la necesidad de la descontaminación, pero es más original la solicitud de mayores reglas y de un mayor papel del Estado. El capitalismo ha usado la era reaganiana para dismantelar los condicionamientos del Estado hacia la empresa, pero necesita de la institución estatal, ora como sede de la «fuerza» y de la «autoridad», ora como fuente de subvenciones y facilidades.

En una versión más sofisticada de la propuesta capitalista en cuestiones de democracia y medio ambiente, se añade a las posiciones de Mandelli una renovada propensión tecnocrática. A la debilidad de la

democracia se quisiera responder con la tentación tecnocrática, sugiriendo una especie de *democracia de los sabios*, de los «competentes». En este caso bastaría con una relación fiduciaria de los gobernados con los gobernantes: estos últimos estarían dotados de las capacidades técnicas necesarias para resolver las emergencias medioambientales. No hace falta decir cuán fascinante es esta democracia tecnocrática para muchos académicos de inclinación medioambientalista, atraídos por un papel político directivo, pero es inútil decir también qué nueva degradación de la democracia provocaría esta hipótesis.

En efecto, la degradación del medio ambiente viene acompañada de una degradación de la democracia, y las empresas capitalistas se han dado cuenta de ello. Su elección es clara, desde finales de los años ochenta. Menos clara es la alternativa «verde» a esta elección.

### 3. EL MEDIO AMBIENTE NECESITA DE LA DEMOCRACIA

El medio ambiente necesita de la democracia y de las instituciones, porque su protección necesita intervenciones orgánicas, competencias coordinadas, consenso activo, por tanto, una rica red de sedes institucionales. La cuestión medioambiental exige una capacidad de control de la colectividad sobre las tecnologías, que si se confían a la mera lógica del mercado pueden producir perjuicios irreparables, y a menudo inimaginables, para la vida y para la salud del planeta. Es el caso de las nuevas biotecnologías, pero también de la vieja energía nuclear, que no quiere desaparecer a pesar de las catástrofes ya provocadas y los permanentes riesgos cotidianos. Pero un problema de control social de las tecnologías (o mejor de los sistemas tecnológicos) es inmediatamente un problema institucional.

Como escribió Paolo degli Espinosa hace algunos años, «de la institución no se puede prescindir, aunque se asiente en la Admi-

nistración, aunque los reglamentos sean preparados en las oficinas de las multinacionales, aunque su papel sea reducido al mínimo, creando decepción y reflujos de los movimientos, incluso en estos casos permanece un 'espacio de las instituciones'». <sup>6</sup> Si las instituciones son indispensables para el medio ambiente, sin embargo, la intervención de las instituciones en materia medioambiental se presta a numerosas observaciones y a distintos motivos de crítica. ¿Es posible, por ejemplo, relegar la idea democrática de la participación a un mero papel de control «a posteriori»? La pregunta parece previsible, pero no lo es. Cuando se concentra toda la iniciativa medioambientalista en el momento de la sanción o de la tributación, se vuelve a una idea mutilada de la participación de los ciudadanos (y de la intervención pública): una idea que delega el «poder» en sujetos autosuficientes y reduce la esfera pública a un papel punitivo. Punir *después* de que se ha realizado el perjuicio medioambiental comporta también un nuevo perjuicio económico a la colectividad. El punto central es en qué dirección se orientan las actividades productivas, según qué escala de prioridades: ¿los intereses de las ganancias, o los intereses sociales?

Los costes sociales de las actividades industriales de alto perjuicio medioambiental serán pagados, en cualquier caso, por todos. Nos daremos cuenta sólo en un segundo tiempo de estos costes, pero serán costes altos, y todos a pagar. La energía nuclear, o una agricultura que, por ejemplo, no se preocupe por los suelos, aparentemente hacen ahorrar; en realidad, tienen un precio social altísimo a largo plazo. Es preciso, por tanto, anticiparse, mirar «con perspectiva» a las cuestiones medioambientales con los ojos vueltos hacia el futuro. Frente al crecimiento de las exigencias de «impuestos ecológicos» y de sanciones para quien viole las disposiciones en materia medioambiental, es preciso tomar nota de que *existen sujetos específicos que contaminan*, y, por tanto, sujetos que deben ser inducidos

<sup>6</sup> P. degli Espinosa, «Ideas y razones para un proyecto de institución medioambientalista», en *Città domani*, setiembre de 1986. Del mismo autor véase

también *La sociedad ecológica*, al cuidado de, Angeli, Milán, 1990.

a no contaminar. Es verdad que todos los habitantes de nuestro planeta son a la vez contaminados y contaminadores, pero no todas las responsabilidades son iguales e indiferenciadas. La divisoria pasa entre norte y sur del mundo, pero también entre papeles y clases sociales.

Aun reconociendo que los estilos de vida en que estamos inmersos provocan perjuicios al medio ambiente, no se puede desconocer un dato; las industrias son las principales responsables de los duros impactos sobre el medio ambiente que han originado la crisis ecológica del planeta. La palabra de orden «quien contamina paga», hecha propia también por la CEE en los últimos años, es válida sobre todo si comprende que el primer contaminador siguen siendo las empresas, no los trabajadores y los ciudadanos. Quien contamina puede ser ciertamente desmotivado de este comportamiento mediante sanciones, que no deben confundirse, sin embargo, con las imposiciones fiscales.

Pero sanciones e impuestos son, de todos modos, intervenciones *ulteriores*. También los movimientos ecologistas parecen subestimar la prioridad de una intervención *previa* al perjuicio medioambiental, antes de que se cree la contaminación. Se trata de ir a la fuente de la contaminación y poner en primer lugar la prevención en vez de la reparación. Del mismo modo que deben disponerse políticas preventivas para la reconversión de las producciones incompatibles con el medio ambiente. Sólo con esta política capaz de encontrar soluciones *antes* del cierre de una fábrica contaminante se puede evitar otro perjuicio en términos de democracia y de calidad social: evitar que los trabajadores se vean obligados a defender su propia fábrica contaminante, con una identificación total (de tipo «japonés») con el destino de la empresa. Es gracias a esta incapacidad de desarrollar políticas preventivas que se han producido graves episodios de «divisiones en el pueblo» como en el caso Farmoplant o el del valle del Bormida.

<sup>7</sup> Véase A. Musci, «L'ecological State», en *El pensamiento verde entre utopía y realismo*, al cuidado de

Por otra parte, no creo que los fondos necesarios para una eficaz protección medioambiental deban exigir una mayor contribución fiscal. Se trata, por el contrario, de orientar recursos que ya existen. Entre otras cosas, una excesiva solicitud de impuestos «verdes» tiene una faceta negativa que no debe subestimarse. En efecto, es preciso prestar atención a una idea de ecología «punitiva», que acabaría por ser aplicable sólo dentro de un esquema autoritario.

Si verdaderamente se quiere hablar de un *ecological state*,<sup>7</sup> como nuevo rostro del *welfare state* (el Estado del bienestar convertido en un Estado ecológico), este nuevo *ecological state* debe estar en condiciones de evitar los puntos más débiles del viejo *welfare state*: no haciendo más pesada, por tanto, la imposición fiscal indiferenciada, y reconsiderando el nexo entre democracia y poder real.

#### 4. QUÉ DEMOCRACIA ES BUENA PARA EL MEDIO AMBIENTE

Al afrontar los puntos del medio ambiente y de la democracia no podemos limitarnos a las teorías y a la polémica política. Es necesario indicar «otro» modelo de democracia demostrando que puede «ser bueno para el medio ambiente». De los mejores proyectos del pensamiento verde y de la práctica política de los movimientos ecologistas surge una precisa dirección a seguir: la *democracia territorial*, que es *distinta* de la mera *participación democrática* o, peor, de la ambigua *democracia económica* que siempre han sido palabras de orden de la izquierda en Italia.

Es necesaria una pregunta, si se quiere concretar la idea de una iniciativa activa territorial: ¿la *suma* de las experiencias locales puede dar lugar a una estrategia general? ¿Se puede realizar de este modo una relación entre dimensión territorial y coordinación y programación central-nacional? Aquí tiene razón el eslogan eco-

J. Jacobelli, Laterza, Bari, 1989.

logista «pensar globalmente, actuar localmente», porque obliga a dar un alcance general incluso a las medidas a tomar en la más pequeña dimensión. Es sólo con una cultura de la complejidad, de las interrelaciones, que es posible fundar *la democracia en el territorio*.<sup>8</sup>

Pero sería un error traducir la democracia territorial a una simple supremacía de los entes locales, es decir, de las instituciones locales ya existentes. Es preciso construir sedes innovadoras para el poder descentralizado, no asentadas en Ayuntamientos, Provincias y Regiones. Sedes decisoriales incluso no representativas, capaces de dar voz a las poblaciones, a las realidades asociadas y a los individuos. No se puede olvidar que en Italia, por contra, se ha afirmado un contexto que pone en peligro muchas de las antiguas ideas autonomistas. Se trata de una tendencia al centralismo que se refiere y afecta tanto a las fuerzas políticas y económicas tradicionales, como a sectores del medioambientalismo.

Frente a estas tendencias no es posible relanzar sencillamente las autonomías locales, o asumir, en todo caso, una línea defensiva. Por el contrario, es preciso ver las limitaciones reales que hubo también en el tema energético y en el tema medioambiental por parte de los entes locales (Regiones, Provincias y Ayuntamientos). Tampoco es suficiente afirmar que han faltado los instrumentos, porque si ello es parcialmente cierto, en verdad no ha sido el motivo único y determinante. Hubo, en cambio, en muchos casos desatención, deficiencias políticas y de capacidad de las administraciones. Hoy se utiliza mucho el término «retraso», pero en este caso se debe hablar de una *desatención* y de una *ineficiencia* de la intervención en el plano local. Es, por tanto, imposible atribuir un nuevo papel a los entes locales y a la situación territorial, por ejemplo, para el ahorro energético y las fuentes renovables, sin una

reforma general del sistema de las autonomías locales y de las Regiones. También en el campo medioambientalista serpentean tendencias centralistas. Frente a incumplimientos y «vacíos» de las autonomías locales, a menudo muy graves, desde sectores del movimiento medioambientalista y verde ha surgido la solicitud de «alguien que decida», en sustitución de administraciones locales que dejan la degradación inalterada sin intervenir.

La tendencia a enfatizar la situación central del Estado se ha reflejado simbólicamente en el debate político del movimiento verde. De una gran batalla en el plano local y territorial —la dimensión en la cual también en Italia han nacido los movimientos medioambientalistas— se ha pasado, con la presentación de listas verdes, a las consultas nacionales y a la participación en las competiciones electorales, a una preponderante atención al aspecto central y nacional. Esta concentración del debate político en el destino del movimiento medioambientalista en Italia ha acabado por valorizar menos la dimensión territorial originaria, que continúa, por el contrario, existiendo y siendo probablemente la más dinámica.

Una tendencia centralista ha sido favorecida, indirectamente, por la creación del Ministerio del Medio Ambiente. Y se ha acrecentado aún más con los nombramientos de Giorgio Ruffolo y luego de Ripa di Meana como ministros: figuras conocidas y competentes, con una aguda capacidad de referirse al problema medioambiental. Precisamente este «prestigio» personal ha acabado por acentuar, incluso independientemente de las mismas fuerzas medioambientalistas y de algunos componentes de la izquierda, la situación centralista de la intervención sobre el medio ambiente. Una autoridad central que tiende además soterradamente a sustituir las competencias regionales y locales. Por ejemplo, en materia de parques naturales está en vías de su-

<sup>8</sup> La solicitud de un nuevo papel de las autonomías locales y de los poderes territoriales surge también de la propuesta de un nuevo modelo energético, no basado en las grandes centrales y en la energía nuclear, sino en el ahorro y en diversas fuentes. Sobre este aspecto existe un verdadero proyecto de ley, el *Esque-*

*ma preliminar de reforma de la vigente normativa en materia de planificación energética*, elaborado por el grupo «Medio ambiente e instituciones» del CRS en noviembre de 1988, donde se proponía construir los Planes energéticos nacionales desde abajo.

peración «de hecho» una idea autonomista y una práctica consolidada que atribuía a las Regiones la apertura de nuevos parques.

Y para no quedarnos anclados sólo en el debate italiano, ¿cómo no ver la fascinación de las hipótesis de «gobierno mundial», que supera incluso el énfasis, que duró largamente, sobre el papel preponderante de la Comunidad Europea? La cuestión medioambiental dice que no puede ser un solo país, y ni siquiera un solo continente, el horizonte de intervención, sino el planeta. Se unen así las tendencias verticalizantes de las grandes empresas capitalistas y de las potencias mundiales más desarrolladas con las aspiraciones verdes a una aproximación global a la crisis ecológica. La dimensión local, sobre todo del *ente* local, sería apeada objetivamente por la misma naturaleza del problema medioambiental, que exige soluciones globales, coordinaciones interregionales y supranacionales.

Hay, por tanto, desde hace tiempo un clima cultural y político que va en dirección opuesta a la difusión territorial de poderes en materia medioambiental. Es preciso entonces preguntarse si la propuesta de democracia territorial, tan contracorriente respecto de lo que sucede en el debate actual, no puede llevar, proponiendo de nuevo la dimensión local, a una especie de «hermosa batalla» que, no obstante, tiene escasas posibilidades de obtener resultados. La solicitud de activación de la dimensión local se produce precisamente mientras estas instancias viven una profunda crisis de poderes, además de una crisis de tipo político. Es preciso ser conscientes de ello: si nos limitamos a los «entes» locales, se llama a la lucha a sujetos que corren el riesgo de no conseguir estar a la altura de las responsabilidades y de las tareas que se les atribuyen.

Sin embargo, para que la cuestión medioambiental no se convierta sólo en un pretexto instrumental para centralizar viejos poderes y exigencias económicas concentradas en el Norte del planeta, es

indispensable que la base de partida de una democracia que sea buena para el medio ambiente se arraigue en la dimensión territorial-local. Es necesaria, por tanto, una nueva circulación de abajo hacia arriba, de la periferia al centro, con un papel activo de las autonomías locales en la programación. Una nueva dislocación de los poderes, que derribe el modelo seguido hasta aquí, que revolucione las prioridades actuales (el primer puesto lo ocupan aún y siempre las ganancias de la empresa). No todas las democracias son buenas para el medio ambiente, es sólo con una democracia territorial, capaz de asumir la democracia social, que se puede beneficiar al medio ambiente. Siempre que por «medio ambiente» no se entienda preservar ilusorios oasis en un planeta en plena ruina ecológica, o proteger trozos de territorio para la memoria de los que están por venir. Si por cuestión medioambiental se entiende una diferente relación entre los humanos y el medio ambiente natural, un equilibrio redefinido entre la actividad de los terrestres y los recursos de la Tierra, entonces la entrada en juego consciente de las poblaciones, el papel directivo de las instancias territoriales, podrán ser decisivos.

## 5. TEORIAS DEMOCRATICAS VERDES

Como conclusión de este breve análisis de la relación entre medioambientalismo y democracia, quisiera volver sobre algunos aspectos de las teorías políticas verdes<sup>9</sup>, capaces de producir novedades importantes a propósito de la democracia. Algunas de estas sugerencias, entre otras cosas, pueden ser una útil alternativa a instancias «liguistas»<sup>\*</sup> en vías de difusión, y que superponen neo-racismos e ideologías de derechas a una legítima referencia al territorio y a la dimensión local.

A partir de mediados de los años ochenta se desarrolla un pensamiento político verde basado en el llamado biorregionalismo, co-

<sup>9</sup> Sobre la existencia de un «pensamiento político verde» propiamente dicho insiste sobre todo Andrew Dobson en el óptimo *Green Political Thought*, Unwin

Hyman, Londres, 1990.

\* Por las Ligas Lombardas (N. del E.)

mo sistema social para una sociedad sostenible. Las teorías biorregionalistas se prestan a muchas críticas, incluso severas, pero representan al mismo tiempo una indicación de gran relieve para delinear una democracia descentralizada. El biorregionalismo no es sólo la bandera de áreas fundamentalistas, sino que ha influido de hecho en todo el pensamiento verde y en los movimientos ecologistas. Por el camino abierto, popularizado y divulgado por *Lo pequeño es hermoso* de E. F. Schumacher, el biorregionalismo se ha traducido en un verdadero paradigma<sup>10</sup>, y ha producido también algunos —limitados— experimentos piloto (en particular en California).

El biorregionalismo parte del supuesto de que hay que vivir según las características de la propia tierra. Es necesario seguir sus ritmos, vivir de aquello que la propia biorregión produce, en términos de materias primas, energía, alimentos, etc. Deben determinarse, por tanto, biorregiones suficientemente amplias para garantizar la subsistencia a las poblaciones que viven en ellas, y bastante grandes, según algunos, para alojar un hospital y una universidad. Las «fronteras» de la biorregión, por tanto, deben ser dadas por estas características: quien vive en una biorregión debe obtener de su propia tierra tanto los alimentos como los bienes «superfluos». Para alcanzar los objetivos biorregionalistas, se precisa una minimización en el uso de los recursos, la eliminación de todo derroche y contaminación, la extensión del reciclaje, la protección conservacionista de la naturaleza y la transformación de la agricultura.

El resultado es una sociedad orgánica con el medio ambiente. Pero para alcanzar esta sociedad se necesita obviamente un «sistema político». El núcleo político de la biorregión es la comunidad, considerada como núcleo básico también del mundo ecológico. Es la comunidad la que debe gestionar la tierra. Puesto que el biorregionalismo exige cambios profundos en los estilos de vida, el poder que actúa sobre estos cambios debe ser un poder difuso. En efecto, basarse en la dimensión local exige

una democracia participativa, en la que el momento de la votación es sólo el inicio y no el fin del procedimiento democrático: este filón del pensamiento político verde exige constitutivamente asambleas ciudadanas y formas de democracia directa.

Como es evidente se trata de un recorrido político que va más allá de las formas de representación del modelo demócrata-liberal occidental. La mirada verde puede ser fecundamente «ingenua», no condicionada por conflictos del pasado, sino en una relación dinámica con el patrimonio de las ideas democráticas tradicionales. El pensamiento político verde acepta de los filones históricos del pensamiento democrático la idea de consenso, y de la democracia liberal asume el respeto por la pluralidad de las voces, pero transformándola en valorización de las diversidades y no en una mera tolerancia.

Ciertamente, también en las más avanzadas lecturas biorregionalistas se corre el riesgo de que de la descentralización se pase a la separación, y, por tanto, de una acentuación centrífuga del biorregionalismo hasta llegar a comunidades incomunicadas. Tampoco parece suficientemente resuelto el punto de las desigualdades objetivas entre regiones, en cuanto a recursos naturales. La redistribución de recursos entre regiones ricas y pobres necesita un gobierno supra-regional, o mejor inter-regional, cuyos contornos democráticos permanecen esfumados en muchos proyectos biorregionalistas.

Pero el mayor riesgo es que precisamente la ecología se convierta en el principal soporte del funcionalismo sistémico «luhmanniano». El mismo biorregionalismo podría convertirse en un modo como cualquier otro de «hacer funcionar» la máquina social, redescubriendo bajo una apariencia verde un viejo racionalismo que quiere regularlo todo de manera tecnicista. Por lo demás, la aproximación sistémica de la «escuela chilena» de Humberto Maturana y Francisco Varela, dos científicos que han estudiado el sistema viviente como «máquina autopoyética», ha dado sustento al funcionalismo reaccionario de Niklas Luh-

<sup>10</sup> Es lo que sostiene Kirkpatrick Sale en *Dwellers in the Land: the Bioregional Vision*, Sierra Club, San

Francisco, 1985.

mann, totalmente orientado a conservar poderes e intereses existentes, en primer lugar el poder de la empresa capitalista. Cuando resurgen las raíces hiperracionalistas y científicas de un sector del ecologismo, los riesgos en términos «democráticos» crecen. Cualquier análisis social sobre la explotación, sobre las desigualdades sociales, sobre la alienación, se volvería superfluo, frente a la primacía de la «funcionalidad».

Este lado funcionalista, que puede tener el biorregionalismo, se hace más evidente si se plantea la hipótesis de un territorio gobernado mediante la separación y el cierre de comunidades autosuficientes. En la versión extrema del biorregionalismo desaparecen los valores comunes entre las diferentes biorregiones: cada biorregión, para dar algunos ejemplos, puede elegir si ser democrática u oligárquica, si perseguir a los homosexuales en cuanto «innaturales», si aceptar el esclavismo sobre la base de una pretendida imitación de los papeles presentes en el mundo animal, y así sucesivamente.

Se trata de conclusiones improbables, pero en cualquier caso posibles. Dado que este pensamiento político verde nace *después* del liberalismo que proponía valores universales (al menos formalmente) y *después* del comunismo humanista, para sustituir los valores universales se hace entonces referencia a los sistemas biológicos y a la naturaleza. Es siempre peligroso sacar consecuencias sociales y políticas de un análisis del mundo natural: de ello puede derivar fácilmente tanto una lectura «alternativa», como una lectura de derechas, autoritaria. Así, el biorregionalismo inquieta cuando quiere fundar un sistema social para los hombres, a partir del estudio de la naturaleza. La vida política y social de los hombres, en suma, debería imitar al mundo natural, y adaptarse al medio ambiente y a sus reglas. El juicio sobre el mundo natural no es neutro y unívoco, y por eso puede legitimar violencias, racismos,

discriminaciones, darwinismos sociales y autoritarismos. Debe repetirse una vez más, podría elegirse un «desarrollo sostenible» como bandera también de un poder dictatorial, que lo quisiera *imponer* por la fuerza, acaso tomando como apoyo ideológico una interpretación de conveniencia del mundo natural.

Pero hay, por el contrario, una salida «revolucionaria» del análisis ecológico aplicado a lo social, y está representada sobre todo por autores como Murray Bookchin, que desde principios de los años setenta predica una ecología de la libertad para las sociedades que han superado las necesidades primordiales. Su anarquismo es confirmado precisamente por el estudio de los ecosistemas. De la rareza de las jerarquías en el mundo animal, por ejemplo, Bookchin deriva la convicción de que también en la política debe evitarse un modelo jerárquico: los ecosistemas no conocen pirámides estratificadas con una especie en el vértice, sino interconexiones circulares. Así, el orden y la estabilidad de una sociedad humana no precisa necesariamente jerarquías. Escribe Bookchin: «Las instituciones libertarias son instituciones *pobladas*, en sentido literal y no metafórico. Es decir, están estructuradas en torno a relaciones directas, /.../ no en torno a relaciones mecánicas, anónimas, representativas. Se basan en la participación, en la implicación y en un sentido de la ciudadanía que estimula la acción, no en la delegación del poder y en la política como espectáculo. Las instituciones libertarias están guiadas por un principio cardinal: se espera que todos los individuos maduros gestionen directamente los asuntos sociales, tal como se espera que gestionen sus asuntos privados»<sup>11</sup>.

Es fácil ver la consonancia con una larga búsqueda del pensamiento comunista de una democracia sustancial, de una superación de la representación delegada liberal. Desgraciadamente, Bookchin tiene la obsesión de liberarse del estorbo de Marx, de-

<sup>11</sup> M. Bookchin. *La ecología de la libertad*, Eleuthera, Milán, 1985, pp. 492-493. El mismo autor proporciona un detallado perfil de la democracia

ecosostenible en *Urbanization Without Cities*, Black Rose Books, Montreal, 1992.

testado en nombre de antiguas disputas entre comunismo marxista y anarquismo. Pero un encuentro entre los dos proyectos y las tensiones eco-comunistas podría ser extremadamente provechoso. Es a este tipo de pensamiento verde al que puede mirar una cultura y una práctica política de izquierdas, de procedencia marxista, y de co-

munismo refundado. No ciertamente a aquellas tendencias que una vez más lo centralizan todo en el fin (salvar el planeta), considerando irrelevantes los medios (democracia o autoritarismo, indiferentemente).

(Traducción de Juan Carlos Gentile Vitale)



C A M P A Ñ A  
por el reconocimiento Internacional de la  
DEUDA  
E C O L O G I C A  
P L A N E T A R I A

